

XXXV Jornada Academicas de la
Comision de Abogacia Joven de COLPROBA.

- **Comision: Derecho Penal**
- **Tema: Baja de la Edad de Imputabilidad en el Derecho Penal Argentino:
¿Reforma efectiva o efectista?**
- **Autor: Ezequiel Elias Segovia**
- **Colegio: Colegio de Abogados de Lomas de Zamora**
- **Domicilio: 30 de septiembre 3358 B, Jose Marmol, Almirante Brown**
- **Telefono: 116913-8544**
- **Correo electronico: ezequiel.elias.segovia@gmail.com**

Baja de la Edad de Imputabilidad en el Derecho Penal Argentino: ¿Reforma efectiva o efectista?

Abstract

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha generado un intenso debate tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad en general. Esta ponencia analiza críticamente las implicancias de reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, abordando aspectos legales, sociales y éticos. Se exploran, por un lado, los argumentos a favor de la medida, que incluyen la prevención del delito y la reintegración social temprana, y por otro, las posturas en contra, que destacan la vulneración de los derechos del niño y el riesgo de perpetuar ciclos de exclusión y violencia. A través de un análisis comparado con otros sistemas de justicia juvenil, tanto en América Latina como en Europa, se evalúan las experiencias de países que han implementado reformas similares. Asimismo, la ponencia reflexiona sobre la compatibilidad de esta propuesta con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. Finalmente, se proponen alternativas menos punitivas, como el fortalecimiento de los sistemas de educación y prevención, que podrían ofrecer soluciones más eficaces para enfrentar la criminalidad juvenil.

Introducción:

La problemática de la baja de la edad de imputabilidad ha generado intensos debates en el ámbito jurídico y social en Argentina. La inseguridad, especialmente cuando involucra a menores de edad, ocupa un lugar central en la preocupación pública, y diversas propuestas han surgido para modificar el régimen penal juvenil con el objetivo de reducir los delitos cometidos por adolescentes. En este contexto, la idea de bajar la edad de imputabilidad aparece como una solución punitiva frente a la creciente percepción de criminalidad juvenil, pero también plantea serias cuestiones éticas, jurídicas y sociales.

Actualmente, el régimen penal juvenil argentino establece que los menores de 16 años no son penalmente imputables, es decir, no pueden ser responsabilizados como adultos ante la comisión de delitos. Este límite está enmarcado por la Ley 22.278, sancionada en 1980, en tiempos de dictadura militar, y ha sido objeto de cuestionamientos y propuestas de reforma desde la vuelta a la democracia. A pesar de los intentos legislativos por actualizar esta normativa, el régimen no

ha sufrido modificaciones significativas, y la edad de imputabilidad sigue siendo un tema sensible en el discurso público y político.

El presente trabajo tiene como objetivo abordar de manera integral la problemática de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, explorando tanto los fundamentos legales y sociales del régimen penal juvenil vigente como las implicancias de las reformas propuestas. Para ello, se llevará a cabo un análisis detallado de los argumentos a favor y en contra de esta medida, así como de su impacto potencial sobre la sociedad, el sistema judicial y los derechos de los menores. Asimismo, se realizarán comparaciones con otros sistemas jurídicos, a fin de extraer lecciones que puedan enriquecer el debate local.

Este análisis parte de la premisa de que la criminalidad juvenil es un fenómeno multifacético, cuyas raíces profundas suelen estar asociadas a condiciones de exclusión social, pobreza y falta de oportunidades. En consecuencia, cualquier propuesta que busque modificar el régimen de imputabilidad penal de menores debe considerar no solo los aspectos jurídicos, sino también las consecuencias sociales de introducir a niños y adolescentes en el sistema penal.

La reflexión crítica que se propone en esta ponencia se enmarca en la necesidad de equilibrar las demandas de seguridad pública con la obligación estatal de garantizar los derechos de los menores, consagrados en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. De este modo, se pretende contribuir al debate desde una perspectiva que contemple tanto los desafíos de la seguridad como los principios de protección de los niños y adolescentes en conflicto con la ley.

1. Marco legal vigente

El régimen penal juvenil en Argentina se encuentra regulado principalmente por la Ley 22.278, sancionada en 1980. Esta normativa establece el sistema aplicable a menores de 18 años que cometen delitos, dividiendo en dos categorías a los jóvenes en función de su edad: aquellos menores de 16 años y los comprendidos entre los 16 y 18 años. Según el artículo 1 de la ley, los menores de 16 años son inimputables, lo que significa que no pueden ser sometidos a un

proceso penal ni condenados. Sin embargo, la situación cambia para los adolescentes de 16 a 18 años, quienes pueden ser responsabilizados penalmente por delitos graves, aunque con ciertas limitaciones y bajo un sistema especial.

La Ley 22.278 fue diseñada en un contexto histórico y político particular, durante la última dictadura militar, con un enfoque punitivo que ha sido criticado por su falta de atención a los derechos del niño. A pesar de su vigencia hasta hoy, se considera desactualizada en relación con los estándares internacionales de protección de los derechos de los menores. Desde el retorno a la democracia, ha habido múltiples intentos de reformar este régimen para adecuarlo a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y con jerarquía constitucional desde 1994.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 40 que los menores deben ser tratados de manera especial, garantizando su derecho a un trato adecuado a su edad y al desarrollo de su potencial como seres humanos. La CDN no fija una edad mínima universal para la responsabilidad penal, sino que deja a los Estados la potestad de determinar ese límite. Sin embargo, insta a los países a implementar sistemas de justicia juvenil que prioricen la rehabilitación y la reinserción social, más que la simple punición.

En este marco, la edad de imputabilidad penal en Argentina —establecida en 16 años— ha sido objeto de un prolongado debate. Quienes impulsan su reducción argumentan que el régimen actual no responde a la realidad de la criminalidad juvenil, especialmente en casos de delitos graves cometidos por menores de 16 años. Por otro lado, los detractores de esta propuesta señalan que la baja de la edad de imputabilidad contraviene los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la CDN y podría vulnerar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

Además de la Ley 22.278, existen otras normativas complementarias que regulan aspectos del sistema penal juvenil en el país. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, busca garantizar los derechos reconocidos a los menores, promoviendo su desarrollo integral. Esta ley introduce un enfoque más protector y de derechos humanos, en contraposición al enfoque punitivo de la Ley 22.278.

En el ámbito internacional, organismos como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas han instado repetidamente a Argentina a revisar su legislación penal juvenil para asegurar que se ajuste plenamente a los principios de la CDN. En particular, el Comité ha expresado su preocupación por las propuestas de bajar la edad de imputabilidad y ha recomendado que se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección social en lugar de recurrir a soluciones punitivas.

Por lo tanto, el régimen penal juvenil en Argentina se encuentra en un momento de tensión entre un marco legal vigente que responde a una lógica punitiva y desactualizada, y las crecientes presiones internas e internacionales para su reforma, en línea con un enfoque de derechos humanos y protección integral de los menores.

2. Argumentos a favor de la baja de la edad de imputabilidad

Los defensores de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina presentan varios argumentos basados en la idea de que una disminución de esta edad ayudaría a enfrentar de manera más efectiva la criminalidad juvenil. Entre los principales fundamentos, destacan la prevención del delito, la posibilidad de una reintegración social más temprana para los menores infractores, y la respuesta ante un contexto de creciente inseguridad. A continuación, se desarrollan estos argumentos en detalle:

2.1. Prevención del delito

Uno de los pilares fundamentales de quienes apoyan la baja de la edad de imputabilidad es la creencia de que esta medida podría actuar como un factor disuasorio frente a la delincuencia juvenil. Según esta postura, la percepción de impunidad entre los menores de 16 años, que actualmente no pueden ser procesados penalmente por la mayoría de los delitos, fomenta conductas delictivas. La ausencia de consecuencias penales claras podría generar en algunos jóvenes la idea de que pueden cometer delitos graves sin enfrentar sanciones severas, lo que, según los defensores de la medida, debilita la capacidad del sistema penal para prevenir la delincuencia.

Bajar la edad de imputabilidad, entonces, permitiría que los menores comprendan desde una edad más temprana que sus acciones tienen consecuencias legales, promoviendo así un mayor respeto por las normas. En este sentido, se argumenta que un régimen penal más estricto, al

aplicar sanciones a edades más bajas, disuadiría a los menores de involucrarse en actividades delictivas, contribuyendo a una reducción general de la criminalidad juvenil.

2.2. Reintegración social

Otro de los argumentos a favor de la reducción de la edad de imputabilidad es la idea de que los menores que cometen delitos graves pueden beneficiarse de intervenciones más tempranas y adecuadas, lo que favorecería su reintegración social. Bajo el régimen actual, los menores de 16 años que incurrir en conductas delictivas suelen quedar fuera del sistema penal, lo que, según los defensores de la medida, limita las oportunidades de intervención y rehabilitación por parte del Estado.

Quienes apoyan la baja de la edad sostienen que el ingreso al sistema penal a una edad más temprana no debe ser visto solo desde una perspectiva punitiva, sino también como una oportunidad para implementar políticas de rehabilitación y reinserción social que permitan corregir conductas antisociales antes de que se arraiguen. Esto incluiría programas educativos, de tratamiento psicológico y de formación laboral que ayuden a los jóvenes infractores a reorientar sus vidas y reincorporarse plenamente a la sociedad.

Además, al intervenir tempranamente, el Estado podría identificar y atender otras problemáticas subyacentes en la vida de los menores, como la desintegración familiar, la violencia doméstica o la exclusión social, que a menudo son factores que contribuyen a la delincuencia juvenil. De este modo, los defensores de la medida sostienen que una edad de imputabilidad más baja permitiría ofrecer a los menores infractores herramientas para superar sus circunstancias y reducir las probabilidades de reincidencia.

2.3. Contexto de aumento delictivo

Un tercer argumento central en el debate es el contexto actual de percepción de inseguridad en Argentina, que ha llevado a sectores de la sociedad y del espectro político a proponer un endurecimiento del régimen penal juvenil. En los últimos años, la opinión pública ha estado marcada por el aumento en la cantidad de delitos cometidos por menores, especialmente aquellos que involucran violencia, lo que ha provocado una demanda social por respuestas más severas y rápidas por parte del Estado.

La baja de la edad de imputabilidad se presenta, en este contexto, como una respuesta a las demandas sociales de mayor seguridad. Los defensores de la medida argumentan que el régimen actual, que protege a los menores de 16 años de ser juzgados y condenados como adultos, resulta insuficiente frente al aumento de delitos graves cometidos por adolescentes. En algunos casos, señalan, los menores son utilizados por organizaciones delictivas debido a que no

enfrentan las mismas consecuencias que los adultos, lo que genera una percepción de impunidad y debilita el sentido de justicia.

Además, la cobertura mediática de casos de criminalidad juvenil, especialmente en delitos graves como homicidios y robos violentos, ha impulsado una narrativa que presenta a los adolescentes como actores peligrosos y justifica la necesidad de endurecer el tratamiento penal. Esta percepción pública de inseguridad creciente, aunque a veces desproporcionada en comparación con las estadísticas reales, actúa como un motor importante en la presión para reducir la edad de imputabilidad.

3. Argumentos en contra de la baja de la edad de imputabilidad

Frente a las propuestas de reducir la edad de imputabilidad, surge una oposición basada en principios de derechos humanos, justicia social y consideraciones criminológicas. Quienes se oponen a esta medida sostienen que la baja de la edad de imputabilidad podría tener consecuencias negativas tanto para los menores como para la sociedad en general. Entre los principales puntos que fundamentan esta oposición se encuentran la protección de los derechos del niño, el riesgo de estigmatización y exclusión social, y la falta de enfoque en las causas estructurales de la delincuencia juvenil.

3.1. Protección de los derechos del niño

Uno de los principales argumentos en contra de la reducción de la edad de imputabilidad se basa en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los menores. De acuerdo con la normativa internacional, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ser tratados de manera acorde a su edad y grado de madurez, con un enfoque en su desarrollo y reintegración social en lugar de sanciones punitivas. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, establece que los menores deben ser protegidos contra toda forma de castigo desproporcionado que no respete su condición de vulnerabilidad.

Bajar la edad de imputabilidad implicaría que los menores podrían ser sometidos a procesos judiciales y penas más severas, lo que podría resultar perjudicial para su desarrollo físico y emocional. Los menores expuestos a sanciones punitivas corren el riesgo de sufrir daños psicológicos y sociales irreparables, al ser tratados de manera similar a los adultos en el sistema penal.

3.2. Estigmatización y riesgo de exclusión social

Otro argumento importante en contra de la baja de la edad de imputabilidad es el impacto de la criminalización temprana en la vida de los menores. La exposición al sistema penal a una edad

temprana puede generar procesos de estigmatización que dificultan la reinserción social de los adolescentes. Ser etiquetados como "delincuentes" desde una etapa temprana no solo afecta su autoestima, sino que también puede limitar sus oportunidades educativas y laborales en el futuro.

El contacto con el sistema penal, en lugar de rehabilitar, muchas veces perpetúa la exclusión social y alimenta un ciclo de violencia y marginalización. Los menores que pasan por el sistema de justicia penal tienen más probabilidades de reincidir en el delito, ya que la falta de oportunidades y el estigma social dificultan su reintegración en la sociedad. En este sentido, criminalizar a los menores no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava al consolidar las desigualdades sociales que en muchos casos contribuyen a su involucramiento en actividades delictivas.

3.3. Falta de enfoque en la prevención

Finalmente, uno de los argumentos más sólidos en contra de la reducción de la edad de imputabilidad es que esta medida no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil. La criminalización de los menores no resuelve problemas como la pobreza, la falta de acceso a educación, la desigualdad social o la violencia intrafamiliar, que son factores clave en la génesis de la criminalidad juvenil.

La baja de la edad de imputabilidad es vista como una solución simplista que se enfoca en la represión, pero no en la prevención. En lugar de endurecer las penas, los detractores de esta medida abogan por una mayor inversión en políticas públicas que ataquen las raíces del problema. Programas de educación inclusiva, políticas de asistencia social y estrategias de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad son vistos como herramientas más efectivas para prevenir el delito entre los jóvenes. En otras palabras, la solución no reside en castigar a los menores, sino en crear condiciones sociales que les permitan desarrollarse plenamente y evitar que caigan en conductas delictivas.

4. Impacto social

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad genera un amplio debate no solo desde el punto de vista jurídico, sino también en cuanto a las implicaciones sociales que una reforma de este tipo podría tener. Los defensores y detractores coinciden en que los efectos de una medida como esta tendrían repercusiones profundas en distintos ámbitos de la vida social y estatal, desde la cohesión social hasta el funcionamiento del sistema judicial y las políticas de seguridad.

4.1. Implicaciones sobre la cohesión social

Uno de los posibles efectos sociales de la baja de la edad de imputabilidad es la alteración en la percepción de justicia dentro de la sociedad. Mientras que algunos sectores pueden ver la medida como un avance necesario para combatir la delincuencia juvenil y responder al creciente temor por la seguridad, otros consideran que podría generar mayor fragmentación social. La idea de criminalizar a menores a una edad más temprana puede fortalecer la estigmatización y división entre distintos sectores sociales, sobre todo en contextos donde la pobreza y la desigualdad ya generan tensiones profundas.

En lugar de contribuir a una mayor cohesión social, la medida podría acentuar las diferencias y distanciar aún más a las comunidades afectadas por la marginalización, generando una percepción de "justicia selectiva". Los menores provenientes de entornos vulnerables son quienes más probablemente se verían afectados por la criminalización temprana, lo que reforzaría la idea de que las políticas punitivas se dirigen especialmente hacia los sectores más desprotegidos.

4.2. Sistema judicial

Otra de las preocupaciones en torno a la baja de la edad de imputabilidad es el impacto que esta medida podría tener sobre el ya saturado sistema judicial y penitenciario en Argentina. Incluir a menores en los circuitos penales podría aumentar significativamente el número de casos que deben ser tratados por el sistema de justicia, lo que implicaría una sobrecarga de los recursos judiciales y administrativos.

Además, la inclusión de menores en el sistema penal podría plantear nuevos desafíos en cuanto a la gestión de centros de detención, tanto por la necesidad de crear instalaciones adecuadas para adolescentes como por el riesgo de que los menores sean integrados en cárceles comunes, lo que sería sumamente perjudicial para su desarrollo. La experiencia internacional ha demostrado que la integración de menores en sistemas penitenciarios diseñados para adultos no solo es ineficaz, sino que incrementa las tasas de reincidencia y perpetúa el ciclo de violencia.

4.3. Políticas de seguridad

Desde una perspectiva de política de seguridad, los defensores de la baja de la edad de imputabilidad argumentan que esta reforma podría tener un efecto disuasorio frente al aumento de delitos cometidos por menores, al generar una respuesta más severa por parte del sistema penal. Sin embargo, la efectividad de esta medida en el largo plazo es objeto de debate. Si bien la aplicación de sanciones más duras a menores podría reducir temporalmente la delincuencia juvenil, los estudios en criminología sugieren que el efecto disuasorio de las penas no es tan efectivo como se suele creer, especialmente en adolescentes.

Los menores suelen cometer delitos por diversas causas, que van desde la falta de oportunidades hasta la presión de pares o el ambiente familiar, y muchos de estos factores no son abordados simplemente endureciendo las penas. En consecuencia, la medida podría ser vista como una respuesta reactiva ante un problema que requiere soluciones más estructurales. En lugar de concentrar los esfuerzos en la criminalización, las políticas de seguridad efectivas deberían enfocarse en la prevención a través de programas educativos, sociales y de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

5. Perspectivas comparadas

El análisis comparado de la baja de la edad de imputabilidad ofrece una visión más amplia de cómo distintos países abordan la criminalidad juvenil. Los modelos adoptados por países de América Latina y Europa muestran enfoques diversos y sus consecuencias a nivel social y judicial. Comparar estas experiencias permite entender las implicancias de una reforma de este tipo en Argentina, destacando cómo el contexto social y cultural influye en la efectividad de las políticas sobre menores.

5.1. América Latina

En América Latina, algunos países han implementado reformas para endurecer el régimen penal juvenil, mientras que otros han optado por mantener o incluso reforzar los enfoques protectores hacia los menores. Los casos de Brasil, Chile y Uruguay son particularmente ilustrativos.

- **Brasil:** En Brasil, la edad mínima de responsabilidad penal es de 18 años, pero existe un régimen especial para adolescentes a partir de los 12 años, en el cual pueden ser sometidos a medidas socioeducativas si cometen delitos graves. No obstante, en los últimos años ha habido propuestas para reducir la edad de imputabilidad a 16 años, argumentando que esta medida ayudaría a combatir la violencia juvenil. Sin embargo, la idea ha sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos que señalan que la criminalización de menores no resuelve los problemas de fondo y puede exacerbar las desigualdades sociales que generan la delincuencia.
- **Chile:** En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece que los menores de entre 14 y 18 años pueden ser responsables penalmente por delitos, pero con un enfoque en la reintegración y con penas reducidas respecto a los adultos. Aunque se ha discutido la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, el enfoque chileno ha

mantenido un equilibrio entre el castigo y la rehabilitación, considerando la vulnerabilidad de los menores.

- **Uruguay:** Uruguay ha sido uno de los países donde más intensamente se debatió la reducción de la edad de imputabilidad. En 2014, se llevó a cabo un referéndum sobre la propuesta de reducirla de 18 a 16 años. La propuesta fue rechazada por la ciudadanía, en gran parte debido a la movilización de organizaciones civiles y de derechos humanos que abogaban por la protección de los menores y cuestionaban la eficacia de las medidas punitivas.

En todos estos casos, la experiencia demuestra que si bien hay una creciente preocupación por la delincuencia juvenil, los enfoques punitivos no siempre son la solución más adecuada, ya que tienden a aumentar la exclusión social y la reincidencia.

5.2. Europa

Europa presenta una gran diversidad de enfoques hacia la responsabilidad penal de los menores, con algunos países que han adoptado sistemas más protectores y otros que permiten la imputabilidad desde edades más tempranas.

- **Suecia y Noruega:** Estos países nórdicos son conocidos por sus sistemas de justicia juvenil centrados en la rehabilitación y la protección de los menores. En Suecia, la edad mínima de responsabilidad penal es de 15 años, pero el enfoque general es evitar la judicialización de los menores a través de medidas preventivas y de reinserción. Noruega, por su parte, ha adoptado un modelo similar, con un fuerte énfasis en la intervención temprana y la educación como herramientas para prevenir la delincuencia juvenil. Ambos países tienen bajas tasas de reincidencia, lo que sugiere que los enfoques centrados en la rehabilitación pueden ser más efectivos a largo plazo.
- **Reino Unido:** El Reino Unido, en cambio, presenta un modelo diferente. En Inglaterra y Gales, la edad mínima de imputabilidad es de 10 años, una de las más bajas de Europa. Este enfoque punitivo ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en casos de menores condenados por delitos graves a edades tempranas. A pesar de este régimen estricto, los estudios han mostrado que la baja de la edad de imputabilidad no ha logrado reducir significativamente la delincuencia juvenil, y muchos menores que pasan por el sistema penal tienden a reincidir.

5.3. Lecciones aprendidas

Al comparar estas diferentes experiencias, se hace evidente que la eficacia de las políticas de imputabilidad penal juvenil está profundamente influenciada por el contexto social y cultural de cada país. En los países nórdicos, donde hay una fuerte red de protección social y un enfoque en la educación y la rehabilitación, los menores reciben apoyo desde una edad temprana, lo que contribuye a evitar que entren en circuitos delictivos. En cambio, en países con una mayor desigualdad social o con sistemas penales más punitivos, la criminalización de los menores no parece tener un efecto disuasorio claro y, a menudo, perpetúa los problemas que busca solucionar.

Para Argentina, la lección principal de estas comparaciones es que las políticas punitivas no son necesariamente la respuesta más efectiva para reducir la delincuencia juvenil. Si bien la baja de la edad de imputabilidad puede ofrecer una solución rápida ante la demanda social de mayor seguridad, los modelos que han tenido éxito a largo plazo son aquellos que invierten en prevención, educación y reintegración social. Estas lecciones destacan la importancia de adoptar políticas adaptadas a la realidad social del país, priorizando el bienestar y desarrollo de los menores.

6. Derechos humanos y protección del menor

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede abordarse sin considerar los derechos humanos y, en particular, la protección especial que los menores reciben según los estándares internacionales. En este sentido, los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen un marco claro de obligaciones para los Estados en relación con la protección de los menores. La posible reducción de la edad de imputabilidad plantea interrogantes sobre su compatibilidad con estos principios y sobre cómo se puede equilibrar la necesidad de seguridad pública con el respeto por los derechos fundamentales de los menores.

6.1. Convención sobre los Derechos del Niño

La **Convención sobre los Derechos del Niño** (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Argentina, es el principal tratado internacional que protege los derechos de los menores. La CDN establece que los niños, definidos como toda persona menor de 18 años, deben gozar de una protección especial, y que en todas las decisiones que los afecten, debe primar el **interés superior del niño** (artículo 3). Este principio es fundamental para evaluar la compatibilidad de cualquier reforma que busque bajar la edad de imputabilidad.

En este contexto, la baja de la edad de imputabilidad podría contradecir este principio si no se garantiza que el tratamiento de los menores en el sistema penal respete su derecho al desarrollo integral, educación y reintegración social. La CDN reconoce que los menores en conflicto con la ley deben ser tratados de manera que promueva su sentido de dignidad y valor, y que se les debe dar la posibilidad de reintegrarse y asumir un papel constructivo en la sociedad (artículo 40). Esto implica que cualquier sanción o medida aplicada a un menor debe estar orientada a la rehabilitación y no simplemente al castigo.

Al mismo tiempo, la CDN recomienda que los menores no sean privados de su libertad, salvo como último recurso y por el menor tiempo posible (artículo 37). Las políticas que promueven un endurecimiento del régimen penal juvenil, incluyendo la baja de la edad de imputabilidad, podrían vulnerar este derecho al aumentar el riesgo de que más menores sean privados de su libertad, lo que contraría los objetivos de reintegración y rehabilitación que establece la Convención.

6.2. Criterios de proporcionalidad

Otro aspecto crucial en el análisis de la baja de la edad de imputabilidad es el **criterio de proporcionalidad**. Este criterio implica que cualquier medida que afecte los derechos de los menores debe ser proporcional al objetivo que busca lograr, en este caso, la seguridad pública y la reducción de la delincuencia juvenil.

En este sentido, es fundamental equilibrar la protección de los derechos de los menores con las preocupaciones de seguridad pública. Si bien la protección de la sociedad es un objetivo legítimo, la proporcionalidad exige que los Estados adopten medidas que no sean más gravosas de lo necesario para lograr este fin. Las políticas punitivas, como la baja de la edad de imputabilidad, deben evaluarse con cautela, ya que su impacto sobre los derechos de los menores puede ser desproporcionado en relación con los beneficios que se espera obtener en términos de seguridad.

Por ejemplo, si la criminalización temprana de los menores contribuye a su exclusión social y aumenta la reincidencia, la medida podría ser ineficaz en la consecución de sus objetivos y, al mismo tiempo, excesiva en términos del impacto que tiene sobre los derechos de los niños. En lugar de ello, las políticas que buscan prevenir la delincuencia juvenil mediante la educación, la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los menores podrían ser más proporcionales y efectivas en la protección tanto de los menores como de la sociedad.

6.3. Responsabilidad del Estado

Los Estados tienen una responsabilidad central en la protección de los derechos de los menores, en especial cuando estos entran en conflicto con la ley. Según la CDN y otros tratados

internacionales de derechos humanos, los Estados están obligados no solo a prevenir la criminalización de los menores, sino también a asegurar su rehabilitación y reintegración social cuando cometen delitos.

Esto implica que las respuestas del Estado ante la delincuencia juvenil deben estar orientadas hacia soluciones constructivas que respeten los derechos de los menores. Los sistemas de justicia juvenil deben proporcionar medidas alternativas al encarcelamiento, tales como la mediación, los programas de reinserción educativa y las sanciones no privativas de la libertad, siempre que sea posible. Además, las intervenciones del Estado deben estar diseñadas para abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil, tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la violencia doméstica.

El Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de supervisar la implementación de la CDN, ha sido claro en sus observaciones generales al destacar que la privación de libertad de menores debe ser una medida de último recurso y que los Estados deben priorizar programas de prevención y reintegración. De hecho, cualquier medida que implique un trato más severo para los menores debe cumplir con altos estándares de protección y rehabilitación, para garantizar que los derechos de los niños no sean sacrificados en nombre de la seguridad pública.

En conclusión, la baja de la edad de imputabilidad plantea desafíos significativos en términos de derechos humanos y protección del menor. Si bien la preocupación por la seguridad es legítima, las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos del niño sugieren que las soluciones punitivas no deben ser la primera respuesta ante el aumento de la delincuencia juvenil. En su lugar, las políticas deben centrarse en la prevención, la protección y la reintegración de los menores, garantizando que el enfoque del sistema penal esté alineado con los principios fundamentales de la CDN.

7. Conclusiones

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina genera un debate profundo en torno a los desafíos que enfrenta el sistema penal juvenil y las respuestas adecuadas para abordar la delincuencia juvenil. A lo largo de esta ponencia, se han expuesto tanto los argumentos a favor como en contra de esta reforma, así como las implicancias sociales, legales y éticas que conlleva. En este sentido, las conclusiones apuntan a reflexionar sobre los riesgos y beneficios que conlleva una política de estas características y a destacar la importancia de considerar alternativas más integrales y menos punitivas.

8.1. Riesgos y beneficios de bajar la edad de imputabilidad

Uno de los principales riesgos asociados a la baja de la edad de imputabilidad es la criminalización temprana de los menores, lo que puede contribuir a su estigmatización y exclusión social. Como se ha señalado, el ingreso de los jóvenes a circuitos penales puede reforzar ciclos de violencia y reincidencia, perpetuando los problemas que se busca resolver. Al mismo tiempo, la baja de la edad de imputabilidad podría ser vista como una respuesta desproporcionada que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, tales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Por otro lado, los defensores de esta medida argumentan que podría tener un efecto disuasorio sobre los jóvenes y contribuir a mejorar la percepción de seguridad en la sociedad. Sin embargo, las experiencias comparadas muestran que una política punitiva no necesariamente reduce los niveles de criminalidad juvenil de forma significativa, y que las soluciones más efectivas son aquellas que abordan los factores sociales y educativos que conducen a la delincuencia.

8.2. La necesidad de un enfoque integral

La protección de la seguridad pública es una preocupación legítima, pero es fundamental que cualquier reforma en materia de imputabilidad juvenil sea analizada desde un enfoque integral. Este enfoque debe considerar no solo la necesidad de prevenir y sancionar el delito, sino también los derechos de los menores y las obligaciones internacionales que ha asumido Argentina en virtud de tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Un enfoque integral debe priorizar la rehabilitación y reintegración de los menores en conflicto con la ley, garantizando que las políticas adoptadas respeten el principio del **interés superior del niño**. Además, debe tener en cuenta que las soluciones no pasan únicamente por el sistema penal, sino que deben incluir esfuerzos interinstitucionales en áreas como la educación, la salud, el trabajo social y la protección de los derechos humanos. En este sentido, un enfoque equilibrado que combine la protección de los derechos de los menores con la seguridad pública resulta esencial para construir una sociedad más justa y cohesionada.

8.3. Alternativas más eficaces y menos punitivas

La evidencia sugiere que las políticas punitivas, como la baja de la edad de imputabilidad, no resuelven de manera efectiva el problema de la criminalidad juvenil. En su lugar, se necesita un enfoque basado en la prevención, la inclusión social y la educación, que permita a los jóvenes acceder a oportunidades reales de desarrollo. Las propuestas alternativas expuestas en este trabajo, como el fortalecimiento del sistema educativo, la implementación de políticas de inclusión y prevención, las reformas judiciales orientadas a la rehabilitación y el acompañamiento familiar y comunitario, ofrecen soluciones más eficaces y menos punitivas.

Estas medidas no solo tienen un mayor potencial para reducir la criminalidad juvenil, sino que también promueven una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Invertir en la educación, el bienestar social y la protección de los menores es una estrategia que, aunque puede parecer menos inmediata en términos de resultados, tiene efectos a largo plazo mucho más positivos y sostenibles que las políticas basadas exclusivamente en la represión penal.

8. Propuestas alternativas

Frente al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, es fundamental considerar alternativas que puedan abordar de manera más efectiva y estructural la delincuencia juvenil. Estas propuestas se centran en la prevención, la educación y la inclusión, priorizando la rehabilitación y la reintegración sobre la criminalización y el castigo. A continuación, se exploran algunas de las estrategias que han demostrado ser más eficaces a largo plazo.

8.1. Fortalecimiento del sistema educativo

El sistema educativo es una herramienta clave para la prevención del delito, ya que proporciona a los jóvenes las habilidades, conocimientos y valores necesarios para su desarrollo integral. Una educación de calidad no solo permite a los jóvenes adquirir competencias laborales, sino que también contribuye a su socialización, al ofrecerles espacios para el desarrollo de su autoestima y habilidades interpersonales.

Estudios internacionales han demostrado que el acceso a una educación inclusiva y equitativa reduce considerablemente las tasas de delincuencia juvenil. En este sentido, es fundamental fortalecer el sistema educativo en las zonas más vulnerables del país, garantizando que todos los niños y adolescentes tengan acceso a una formación que les permita superar las barreras de la pobreza y la exclusión social. Además, es esencial promover programas específicos para jóvenes en riesgo de caer en circuitos delictivos, brindándoles oportunidades concretas de reintegración escolar y capacitación laboral.

El fortalecimiento del sistema educativo, por lo tanto, no solo se enfoca en la prevención, sino también en la creación de oportunidades para los jóvenes que han cometido delitos, favoreciendo su reinserción en la sociedad y evitando la reincidencia.

8.2. Políticas de inclusión y prevención

Las **políticas de inclusión y prevención** son una estrategia central para abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil. El enfoque preventivo se basa en la identificación temprana de jóvenes en situación de riesgo y en la implementación de programas de intervención que actúen antes de que estos ingresen al sistema penal.

Existen diversos programas que han demostrado su efectividad en este sentido, como aquellos orientados a la **intervención temprana** en contextos de violencia familiar, exclusión social o abandono escolar. Estos programas se enfocan en fortalecer las habilidades emocionales y sociales de los jóvenes, así como en brindarles acceso a actividades recreativas, educativas y laborales. En muchos casos, el acompañamiento por parte de profesionales capacitados y el acceso a mentores pueden marcar una diferencia significativa en la vida de los adolescentes, alejándolos de la criminalidad.

Asimismo, las políticas de prevención deben incluir medidas para mejorar la **inclusión social**, que aborden la pobreza y las desigualdades estructurales. Programas de apoyo económico, capacitación laboral y fortalecimiento de las redes comunitarias son esenciales para que los jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan desarrollar proyectos de vida alejados del delito.

8.3. Reformas judiciales y penitenciarias

Un enfoque efectivo frente a la delincuencia juvenil debe incluir reformas en los **sistemas de justicia juvenil** que promuevan la rehabilitación sobre la punición. El objetivo de cualquier intervención del sistema penal en la vida de los menores debe ser su reintegración a la sociedad, garantizando que los jóvenes que cometen delitos no se vean atrapados en un ciclo de criminalización y exclusión.

Las reformas deben incluir **programas de justicia restaurativa**, en los que se priorice la reparación del daño causado por el delito y la reintegración del joven en su comunidad, en lugar de recurrir automáticamente al encarcelamiento. La **privación de la libertad** debe ser siempre la última opción, y cuando se recurra a ella, debe garantizarse que las condiciones de los centros penitenciarios juveniles favorezcan la educación, la formación laboral y el desarrollo personal de los menores.

Además, es importante mejorar el **acceso a la defensa pública** para los menores en conflicto con la ley, asegurando que reciban un trato justo y equitativo en todo el proceso judicial. Las reformas judiciales también deben enfocarse en reducir la sobrecarga del sistema penal juvenil, mediante la implementación de alternativas al encarcelamiento, como los servicios comunitarios y los programas de mediación.

8.4. Acompañamiento familiar y comunitario

El **acompañamiento familiar y comunitario** es otro pilar fundamental en la prevención del delito juvenil. Los jóvenes que crecen en entornos familiares disfuncionales o en comunidades con altos niveles de violencia y exclusión son más propensos a involucrarse en actividades delictivas. Por ello, es esencial fortalecer las redes de apoyo familiares y comunitarias, creando entornos que promuevan el desarrollo saludable de los jóvenes.

Programas de **apoyo a las familias** en situación de vulnerabilidad pueden incluir asistencia psicológica, económica y social, ayudando a los padres a desempeñar un rol más activo y positivo en la vida de sus hijos. Al mismo tiempo, es necesario fomentar la **participación de la comunidad** en la prevención de la delincuencia juvenil, a través de redes de colaboración entre vecinos, organizaciones civiles y autoridades locales.

Las iniciativas comunitarias, como los centros de recreación, deportes y cultura, brindan a los jóvenes espacios donde pueden desarrollar sus talentos y construir relaciones saludables con sus pares y con adultos que actúan como referentes. Estas actividades no solo previenen el delito, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y cohesión social dentro de la comunidad.

9. Bibliografía

- **Legislación Nacional**
 - Constitución Nacional de la República Argentina (1994).
 - Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 26.061.
 - Código Penal de la República Argentina (t.o. 1984), art. 34 y ss.
- **Legislación Internacional**
 - **Convención sobre los Derechos del Niño** (CDN). Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
 - **Reglas de Beijing** (1985). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
 - **Directrices de Riad** (1990). Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.